

Víctimas en el combate a la pobreza



Julia de la O
Asesora Legislativa

A raíz de la discusión del proyecto de ley de reforma a la Ley del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, el Instituto Nacional de las Mujeres "se sacó la lotería" y fue sujeto durante semanas de mociones para rebajarle su presupuesto de un 2% a un 1%, hasta que finalmente se regresó al 2% original

que incluyó, desde siempre, la diputada proponente del proyecto.

La confusión que hay en la distinción entre políticas universales y políticas selectivas en el ámbito social, afecta la eficacia de las acciones de política que se deben adelantar y causan serias fracturas e inseguridad en quienes deben ejecutarlas.

Un argumento usado en su momento para justificar la disminución de recursos al INAMU lo arguyó el señor Juan Manuel Cordero, viceministro de Desarrollo Social de la siguiente manera: "los recursos de Fodesaf deben ser empleados para sacar a las personas de la pobreza y no para gastos administrativos de las instituciones".

El INAMU tiene como responsabilidad la ejecución de políticas universales que ofrezcan los servicios a todas las mujeres por igual. Paralelamente, tiene acciones de política selectivas que deben ir dirigidas a la población femenina en vulnerabilidad social, por lo tanto, el rasero utilizado para procurar los rebajos a la Institución, dejan en gran inseguridad de gestión a sus autoridades.²

Entre los fines del INAMU se encuentra el de la formulación e impulso de la política nacional para la igualdad y equidad de género, en coordinación con las instituciones públicas, las instancias estatales que desarrollan programas para las mujeres y las organizaciones sociales.

Ante este panorama nos preguntamos: ¿tendrán claras las autoridades de gobierno que las políticas públicas tienen múltiples objetivos, entre los que se encuentran las de combate a la pobreza? ¿Cómo van a intentar reducir la asignación presupuestaria de una institución que tiene la doble misión de implementar políticas universales y selectivas a la vez? o, ¿es que hay que olvidar que el objetivo de la política social implica "...la construcción de la ciudadanía, la integración y la movilidad social y la competitividad a través de inversión social en capital humano"?³

En tanto no se hagan estas distinciones, el Estado involucrará y los funcionarios actuarán cada vez menos proactivamente en el cumplimiento de sus funciones, so pena de ver reducidos los ingresos institucionales para operar.

La Cepal ha venido insistiendo desde los años noventa en la necesidad de crear sinergias positivas entre crecimiento económico y equidad social en el contexto de la modernización productiva. Por ello, se debe aumentar la competitividad y velar por los equilibrios macroeconómicos para fortalecer una democracia política participativa e inclusiva. Así las cosas, se impone la delimitación de las políticas sociales universales y aquellas de combate a la pobreza para no victimizar innecesariamente la institucionalidad pública que trabaja para cumplir los fines y objetivos que le dicta la ley como le acaba de pasar al INAMU.